

JUAN PACHECO ROMANÍ

Presidente de AFIN



El rol estratégico de la infraestructura: cuestión de Estado, no de coyuntura

El mensaje tras el inicio de una nueva gestión gubernamental deja una premisa insoslayable: la apremiante necesidad de corregir las fallas estructurales del Estado en la provisión de servicios esenciales. El déficit social acumulado no es un hecho fortuito; es el resultado directo de la dispersión de esfuerzos, la burocracia ineficiente y la falta de continuidad en las decisiones de inversión.

Frente a esta realidad, el objetivo nacional debe ser uno solo: integrar al Perú. La geografía, la dispersión demográfica y la diversidad cultural no pueden seguir siendo excusas para sostener a un país fraccionado. In-

tegrar implica articular territorios con redes de transporte eficiente, agua potable, salud, educación y conectividad digital y electricidad, para asegurar igualdad de oportunidades.

Para lograrlo, la inversión en infraestructura exige un pilar innegociable: seguridad jurídica y predictibilidad. La tramitomanía sofocante y la superposición administrativa no solo retrasan los proyectos, sino que destruyen el valor público. Hoy se destina el 4.9% del PBI a la inversión pública, pero con un impacto visiblemente limitado. Cifras del Banco Mundial revelan que entre el 2013 y 2022 el 45% de las obras públicas quedaron abandonadas, mientras que cerca del 80% de los proyectos fueron incluidos al presupuesto público, tras la aprobación presupuestal original.

Superar esta ineficiencia no implica recentralizar, sino modernizar la gestión pública. Se requieren esquemas ágiles y eficientes: la agregación de proyectos en paquetes estratégicos, el acompañamiento con gestores especializados (project managers) sin depender de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) o de las competencias presupuestales y el diseño de programas sectoriales integrales.

Además, debemos adoptar plenamente el enfoque de Infraestructura Sostenible, garantizando que cada obra sea concebida pensando en todo su ciclo de vida: planeamiento, ejecución, puesta en marcha, operación y mantenimiento.



La ejecución de grandes proyectos de envergadura nacional exige incorporar la gestión de interferencias, liberación predial y sostenibilidad socioambiental desde la etapa fundacional".

Asimismo, es imperativo fortalecer la capacidad de gestión técnica en las entidades del Estado. La priorización de ProInversión como agencia articuladora de proyectos nacionales apunta en la dirección correcta para agilizar inversiones en puertos, carreteras, aeropuertos, energía y telecomunicaciones. No podemos seguir tolerando expedientes técnicos que tardan más de dos años en ser aprobados o demoras injustificadas en obras críticas de conectividad básica.

A esto debe sumarse una visión moderna de corredores logísticos, integrada con infraestructura social. En salud, educación y agua potable, la colaboración público-privada (APP) ha demostrado ser una herramienta eficaz que debe ser escalada con celeridad.

Finalmente, la ejecución de grandes proyectos de envergadura nacional exige incorporar la gestión de interferencias, liberación predial y sostenibilidad socioambiental desde la etapa fundacional. Las brechas nos cuestan caro: la falta de un Sistema Integrado de Transporte solo en Lima genera pérdidas anuales del 2.4% del PBI al 2023, según el BCR. Debemos respetar el espacio fiscal y también los sobrecostos de no hacer. El reto es enorme, pero la infraestructura debe asumirse, sobre todo, como una política de Estado de largo plazo.